

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

| | |
|-------------|--|
| PROCESO | EJECUTIVO |
| DEMANDANTE | COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO - COOPANTEX |
| DEMANDADOS | PAULA ANDREA MEJÍA PINEDA EDISON ARLEY TABORDA BEDOYA |
| ACTUACIÓN | CONFLICTO DE COMPETENCIA |
| PROCEDENCIA | JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGUI Y JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN |
| RADICADO | 05001 22 03 000 2023 00469 00 INTERNO 2023-044 |
| PROVIDENCIA | AUTO INTERLOCUTORIO N° 187 |
| DECISIÓN | DETERMINA COMPETENCIA EN EL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI POR DESPRENDERSE PREMATURAMENTE DE ÉSTA. |

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

Se dirime por el presente proveído, el conflicto negativo de competencia suscitado entre el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI, respecto de la demanda ejecutiva promovida por la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO -COOPANTEX en contra de PAULA ANDREA MEJÍA PINEDA y EDISON ARLEY TABORDA BEDOYA.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderada judicial la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO -COOPANTEX, promovió demanda ejecutiva, pretendiendo se librara mandamiento de pago en su favor y en contra de los señores PAULA ANDREA MEJÍA PINEDA y EDISON ARLEY TABORDA BEDOYA, por la deuda contenida en el título valor – pagaré arrimado como base de recaudo.

El escrito introductor fue dirigido al juez civil municipal de Itagüi, correspondiendo por reparto al JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE

ITAGÜI, autoridad judicial que mediante auto del 22 de agosto de 2023, decidió rechazar la demanda por falta de competencia, con sustento en que *“la apoderada en el acápite de notificaciones establece la competencia por una dirección que no corresponde al Municipio de Itagüí, la Calle 30ª N° 75-24, de otro lado en la narración de los hechos la apoderada indica que se presentó previamente demanda por el mismo título en el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Medellín, proceso que terminó por desistimiento tácito, lo que da entender que efectivamente la demandada tiene su domicilio en dicho municipio”*, decidiendo entonces remitir el expediente a reparto de los juzgados civiles municipales de Medellín.

Efectuada la anterior remisión, la demanda fue asignada al JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN, despacho judicial que también se declaró incompetente para conocer del asunto, proponiendo en consecuencia conflicto negativo de competencia, argumentando que la demanda fue dirigida a los jueces civiles municipales de Itagüí por el domicilio de uno de los demandados y que no puede confundirse el concepto domicilio con el de dirección para notificaciones.

Recibido el expediente en el Tribunal, se procede a resolver de plano el conflicto suscitado entre las referidas dependencias judiciales, conforme lo manda el artículo 139 del Código General del Proceso, previas las siguientes.

II. CONSIDERACIONES

1. Corresponde a esta Magistratura, definir el conflicto suscitado entre el JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN y el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 139 del Código General del Proceso, por tratarse esta Corporación del Superior Funcional común a las dos dependencias judiciales aludidas.
2. La necesidad de distribuir la función de administrar justicia entre distintos órganos judiciales determina la formulación de reglas legales, tendientes a

satisfacerlas, y es precisamente en este punto en el cual cobra importancia el concepto **competencia**.

La noción de **competencia** viene en este sentido a integrar y concretar el amplio ámbito de atribuciones que es circunstancial a la idea de potestad judicial; ello por cuanto una vez se ha establecido que el conocimiento de determinado tipo de petición corresponde a los órganos judiciales del Estado, la regla de competencia interviene para determinar y asignar de forma específica a cuál de todos los órganos judiciales dispuestos corresponde el conocimiento de la causa. No cabe duda que la competencia guarda íntima relación con la garantía procesal de legalidad del juez y específicamente con el principio de juez natural.

Esta garantía se concreta en el establecimiento de reglas claras que permitan al justiciable conocer el sujeto que habrá de estar encargado de conocer y resolver cada uno de los tópicos materia de decisión; para ello, la competencia se asigna por normas imperativas, **contentivas de reglas de orden público e interés general que sean inmodificables, improrrogables indelegables y susceptibles de sanción ante vulneración mediante la consagración de la nulidad procesal**.

De manera que para asignar la aptitud legal para el conocimiento de un proceso determinado, el legislador acude a los denominados *factores* de competencia, dentro de los cuales se encuentran el **objetivo** que hace referencia a la naturaleza de la controversia, denominado también como competencia por materia; el **subjetivo** de acuerdo a la calidad de las personas que intervienen en la Litis; el **territorial**, en virtud del que se precisa a cuál de los distintos despachos judiciales de igual categoría existentes en el territorio nacional, corresponde atender el ruego de tutela jurisdiccional; y el **funcional** que atiende a las funciones asignadas a cada Juez de la República.

3. En el asunto *sub examine* está claro que lo pretendido es promover una acción ejecutiva con fundamento en la falta de pago de la obligación contenida en un título valor – Pagaré -, y para esta clase de causas son determinantes en materia de competencia territorial dos foros o fueros; esto es, el personal o

domicilio del demandado y el lugar de cumplimiento de la obligación, conforme lo disponen expresamente las reglas 1ª y 3ª del artículo 28 del Código General del Proceso.

Se tiene entonces que, si se presenta concurrencia en relación con los mencionados fueros del criterio territorial de competencia, corresponderá al demandante elegir entre uno u otro, en caso de que exista diferencia; sin que esté permitido al Juez o a la contraparte reprochar dicha elección.

Sobre tal asunto, se ha pronunciado en forma reciente la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, como sigue:

Significa, que el promotor de un contencioso con soporte en un negocio jurídico con alcance bilateral o en un título ejecutivo tiene la opción de accionar, *ad libitum*, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusión o título de ejecución debía cumplirse; pero, insístese, ello queda, en principio, a la determinación expresa de su promotor¹.

4. En el *sub lite* se observa que los datos de la demanda no son lo suficientemente claros que permitan definir con contundencia el juez competente territorialmente, puesto que se dirigió a los jueces civiles municipales de Itagüi aduciendo que ese es el domicilio como también lugar donde recibirá notificaciones la codemandada PAULA ANDREA MEJÍA PINEDA, detallando para esto último (notificaciones) la dirección “Calle 30A # 75 - 24 del Municipio de Itagüi” y, si bien la dirección de notificaciones no siempre es igual a la del domicilio, para el presente caso, la manifestación solo ayuda a acrecentar la incertidumbre sobre el lugar del domicilio de la aludida codemandada, porque en Municipio de Itagüi, según búsqueda realizada por el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL de esa localidad, lo que se constató en este Despacho, al parecer no existe la referida dirección.

Ahora bien, debido a la situación que se presta para confusiones en este caso, le correspondía al juez elegido por la parte demandante, **previa inadmisión de la demanda**, esclarecer la situación, evitando **prematuramente** declararse

¹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 1 de agosto de 2016. M.P. Dr. Luis Armando Tolosa Villabona. Rad. 11001-02-03-000-2016-02056-00

incompetente como lo hizo, porque, aunque existen indicios de que la codemandada aludida puede estar domiciliada en el Municipio de Medellín, ello no es claro aún, lo que implica que, por el momento, el reparto realizado con las manifestaciones iniciales de la demanda fuese adecuado.

Siendo así las cosas, si la apoderada judicial de la parte demandante escogió el Juez del Municipio de Itagüi para presentar la acción, afirmando ser esa localidad el domicilio de una de las integrantes de la parte demandada, entonces el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI debió asumir el conocimiento del presente asunto y no desprenderse del mismo de forma anticipada, esto, al menos hasta que con mayores elementos de juicio pueda sostenerse hipótesis diferente.

5. CONCLUSIÓN

Viene de lo dicho que tal y como está redactado el libelo genitor, la autoridad judicial competente para conocer de la demanda que encabeza estas diligencias, es el JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI, agencia judicial a la que se ordenará remitirlas, **sin perjuicio de que en ejercicio de sus facultades saneadoras indague o esclarezca la enunciación o determinación del domicilio de la parte demandada o que su aptitud legal pueda variar por el cuestionamiento que eventualmente realice el extremo pasivo procesal por la vía procesalmente dispuesta para ello.**

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín,**

II. RESUELVE

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto negativo de competencia suscitado, **DECLARANDO** que el competente para conocer del proceso referido en la motivación, es el **JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE ITAGÜI**, por haberse desprendido de forma prematura de la competencia, al cual se ordena remitir las presentes diligencias, una vez adquiriera firmeza este auto.

SEGUNDO. PRECISAR que la competencia radicada se establece, sin perjuicio de que en ejercicio de sus facultades saneadoras se indague o esclarezca la enunciación o determinación del domicilio de la parte demandada o que la aptitud legal pueda variar por el cuestionamiento que eventualmente realice el extremo pasivo procesal por la vía procesalmente dispuesta.

TERCERO. COMUNICAR la decisión adoptada al **JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN**.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 105 C.G.P. en concordancia con la Ley 2213 de 2022)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d458904f79748e3c85ee5cad7f53fd31db6369e9fd4021abccdcfc133db260b**

Documento generado en 15/12/2023 11:37:21 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>